



Consejo de Seguridad

Distr. general
17 de junio de 2013
Español
Original: inglés

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1373 \(2001\)](#) relativa a la lucha contra el terrorismo

Carta de fecha 10 de junio de 2013 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir por la presente la respuesta del Gobierno de Guyana a la solicitud de información sobre la aplicación de la resolución [1624 \(2005\)](#) del Consejo de Seguridad relativa a la lucha contra el terrorismo (véase el anexo). Esta respuesta ya fue presentada previamente por correo electrónico, el 23 de septiembre de 2011.

(Firmado) George Talbot
Embajador
Representante Permanente



**Anexo de la carta de fecha 10 de junio de 2013 dirigida
al Presidente del Comité por el Representante
Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas**

**Respuesta del Gobierno de Guyana a la solicitud de
información formulada por las Naciones Unidas
respecto de la aplicación de la resolución 1624 (2005)
del Consejo de Seguridad, relativa a la lucha contra
el terrorismo**

31 de agosto de 2011

Párrafo 1

1.1 ¿Qué medidas ha adoptado su país para prohibir por ley e impedir la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo? ¿Qué otras disposiciones, en su caso, se están estudiando?

La libertad de expresión está garantizada por la Constitución de Guyana, que en su artículo 146, párrafo 1) establece que “excepto con el consentimiento del interesado, no podrá limitarse el derecho de ninguna persona a la libertad de expresión, es decir, la libertad de opinar sin interferencias, la libertad de recibir ideas e información sin interferencias, la libertad de comunicar ideas e información sin interferencias y el derecho a que no se interfiera con la correspondencia privada”. Sin embargo, el párrafo 2) del artículo 146 prevé varias excepciones que autorizarían a prohibir por ley e impedir que se incentive la comisión de actos de terrorismo. En primer lugar, el apartado a) del párrafo 2) dispone que la ley puede prohibir a una persona el ejercicio de su libertad de expresión si ello fuera “razonablemente exigible en interés de la defensa, así como de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud públicos”. En segundo lugar, el apartado b) del párrafo 2) establece que la ley puede prohibir a una persona el ejercicio de su libertad de expresión si ello fuera “razonablemente exigible para proteger los ... derechos y libertades de otras personas”. En tercer lugar, el apartado d) del párrafo 2) dispone que la ley puede prohibir a una persona el ejercicio de su libertad de expresión si ello pudiera “tener como consecuencia generar divisiones raciales o étnicas en la población de Guyana”. Por último, el párrafo 3) del artículo 146 establece que “la libertad de expresión ... no conlleva el derecho a pronunciar discursos ni a hacer manifestaciones de otro tipo que inciten al odio, de cualquier forma que sea, que puedan generar hostilidad o antagonismo contra cualquier persona o clase de personas”. Estas disposiciones claramente prevén que puedan prohibirse por ley expresiones que tengan por objeto incitar a cometer actos de terrorismo. Estas cuatro excepciones a la libertad de expresión de la persona constituyen respetables esfuerzos del Gobierno de Guyana por tener en cuenta razonablemente la necesidad legítima e imperiosa de que se prohíba por ley y se impida la incitación a cometer actos de terrorismo, restringiendo este derecho fundamental.

Las libertades de reunión y asociación y el derecho a manifestar se encuentran garantizados por la Constitución de Guyana con arreglo a lo dispuesto en su artículo 147, párrafo 1). Sin embargo, el párrafo 4) del artículo

147 prevé dos excepciones que autorizarían a que la ley prohibiera e impidiera la incitación a cometer actos de terrorismo. En primer lugar, el apartado a) del párrafo 4) establece que puede prohibirse a una persona el ejercicio de su libertad de reunión y asociación y el derecho a manifestar si ello fuera “razonablemente exigible en interés de la defensa, así de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud públicos”. Asimismo, el apartado b) del párrafo 4) establece que una persona puede ser privada del ejercicio de su libertad de reunión, asociación y del derecho a manifestar si ello fuera “razonablemente exigible para proteger los derechos o libertades de otras personas”. Estas disposiciones claramente contemplan la posibilidad de que puedan prohibirse por ley reuniones, asociaciones y manifestaciones que tengan por objeto incitar a cometer actos de terrorismo. Esas dos excepciones a la libertad de reunión y asociación y al derecho a manifestar constituyen respetables esfuerzos del Gobierno de Guyana por tener en cuenta razonablemente la necesidad legítima e imperiosa de que se prohíba por ley y se impida la incitación a cometer actos de terrorismo, restringiendo este derecho fundamental.

La libertad de conciencia está garantizada por la Constitución de Guyana con arreglo a lo dispuesto en el artículo 145, párrafo 1). Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 145 establece excepciones que autorizarían a prohibir actos de terrorismo y la incitación a cometerlos. En primer lugar, el apartado a) i) del párrafo 5) establece que puede prohibirse el ejercicio a una persona de su libertad de conciencia cuando ello resulte “en interés de la defensa, así como de la seguridad, el orden, la moralidad o la salud públicos”. Además, el apartado a) ii) del párrafo 5) prevé que puede prohibirse el ejercicio a una persona de su libertad de conciencia “con el fin de proteger los derechos y libertades de otros”. Estas disposiciones claramente prevén la posibilidad de que se prohíba la propagación de ideas que tengan por finalidad la incitación a cometer actos de terrorismo. Esas dos excepciones a la libertad de conciencia constituyen respetables esfuerzos del Gobierno de Guyana por tener en cuenta razonablemente la necesidad legítima e imperiosa de que se prohíba por ley y se impida la incitación a cometer actos de terrorismo, restringiendo este derecho fundamental.

Desde el atentado con bomba perpetrado contra Cubana Airlines en Barbados en 1976, en que fallecieron 11 guyaneses y personas de otras nacionalidades, Guyana ha permanecido firmemente decidida a condenar el terrorismo.

El Gobierno de Guyana está comprometido a desalentar las actividades de grupos subnacionales en el país, aumentando la reunión de inteligencia y mejorando la seguridad mediante operaciones de Servicios Conjuntos y eliminando la exclusión social y los factores de vulnerabilidad que llevan a la contratación de células terroristas transnacionales.

Además, la reforma de la Ley de Armas de Fuego de 2007 y su reglamentación, la Ley de Intercepción de Comunicaciones de 2008, la Ley de Secuestro y Piratería de 2008, la Ley de Blanqueo de Dinero y de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de 2009, con su reforma de 2010 y su reglamentación, la Ley de (licenciación) de Organismos de Transferencia de Dinero de 2009, la Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales de 2009, y

la reforma de la Ley de Prófugos de 2009 constituyen el marco legislativo para la reunión de inteligencia y el rastreo del movimiento de fondos, entre otras cosas, por parte de quienes tengan inclinación a cometer esos actos, y contemplen esos objetivos.

1.2 ¿Qué medidas adopta su país para denegar cobijo a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de incitar a la comisión de un acto o actos de terrorismo?

La libertad de circulación está garantizada por el artículo 148, párrafo 1) de la Constitución de Guyana que establece que “ninguna persona será privada de su libertad de circulación, es decir, del derecho a transitar libremente por Guyana, el derecho a residir en cualquier parte de Guyana, el derecho a ingresar y egresar de Guyana y el derecho a no ser expulsado del país”. Sin embargo, el párrafo 3) del artículo 148 establece varias excepciones para denegar cobijo seguro a personas con respecto a las cuales existe información fidedigna y pertinente que dé motivo para pensar que son culpables de haber incitado a la comisión de actos de terrorismo.

En primer lugar, el apartado a) del párrafo 3) establece que puede prohibirse el ejercicio de la libertad de circulación si ello es “razonablemente exigible para la defensa, la seguridad o el orden públicos o para impedir la subversión de las instituciones democráticas en Guyana”. En segundo lugar, el apartado e) del párrafo 3) establece que puede cercenarse el ejercicio de la libertad de circulación cuando se trate de “imponer restricciones a la libertad de circulación de personas que no sean ciudadanos de Guyana”. En tercer lugar, el apartado g) establece que puede impedirse el ejercicio de la libertad de circulación de una persona si esta “i) debe ser juzgada o sancionada en algún otro país por un delito penal cometido con arreglo a la ley de ese país”. Esas disposiciones claramente contemplan la posibilidad de que pueda prohibirse la circulación al denegar cobijo seguro a personas con respecto a las cuales existe información fidedigna y pertinente que dé motivo para pensar que son culpables de haber incitado a cometer actos de terrorismo. Estas excepciones a la libertad de circulación constituyen respetables esfuerzos del Gobierno de Guyana por tener en cuenta razonablemente la necesidad legítima e imperiosa de que se deniegue cobijo seguro, restringiendo este derecho fundamental.

En las leyes de inmigración de Guyana y en las mencionadas en el párrafo 1.1 del presente informe también se contempla la posibilidad de que el país deniegue cobijo seguro a esas personas, como se expone en el párrafo 1.2, cuestión que se considera caso por caso.

Párrafo 2

2.1 ¿De qué forma coopera su país con otros Estados para reforzar la seguridad de sus fronteras internacionales con miras a impedir que los culpables de incitar a la comisión de un acto o actos de terrorismo entren en su territorio, en particular combatiendo la utilización de documentos de viaje fraudulentos y, en la medida de lo posible, aplicando procedimientos más eficaces de detección de terroristas y de seguridad de los pasajeros?

El Gobierno de Guyana ha adoptado medidas positivas para abordar integralmente la cuestión de la seguridad de sus fronteras internacionales y mejorarla con miras a impedir que aquellas personas que sean responsables de incitar a la comisión de actos de terrorismo ingresen en su territorio, e invierte considerablemente en el sector de la seguridad.

La reforma de la legislación llevada a cabo entre los años 2007 y 2009 ha contribuido a la adopción de un marco más moderno para el sector de la seguridad que permite afrontar las nuevas dificultades que se presentan, como la utilización de documentos de viaje fraudulentos, problemas relacionados con los exámenes para la detección de terroristas y anomalías en los procedimientos para la seguridad de los pasajeros.

El país pone énfasis en la modernización de la Fuerza Policial de Guyana, mejorando las relaciones entre la policía y la comunidad, creando barrios más seguros y teniendo en cuenta la cooperación con otros Estados. La Fuerza de Defensa de Guyana ha recibido recursos y capacitación adicionales para estar en mejores condiciones de afrontar las dificultades que plantea la seguridad nacional y transfronteriza.

Esas medidas sinceras, que han sido adoptadas de buena fe, han atraído el apoyo de donantes del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que se han elaborado dos programas sobre seguridad ciudadana (2005-2011) y reforma del sector de la justicia (2005-2011), con financiación del Gobierno de Guyana y el Banco.

En 2005, a fin de facilitar una participación amplia y hacer un seguimiento de las cuestiones relativas al crimen y la seguridad, y en respuesta a los compromisos asumidos por los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Gobierno de Guyana estableció la Comisión Nacional sobre la Ley y el Orden, un órgano de composición amplia, de 28 miembros, integrado por representantes de los trabajadores, la comunidad empresarial, la comunidad religiosa y partidos políticos del Parlamento, que elabora informes, se reúne con miembros de la comunidad y formula recomendaciones al Gobierno sobre cómo prevenir y combatir las distintas formas de actividad criminal.

Guyana coopera con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de quien recibe apoyo técnico, y coordina su labor con la INTERPOL y organismos extranjeros especializados en la lucha contra los estupefacientes.

Guyana también ha celebrado acuerdos de cooperación bilateral con Estados vecinos, lo que permite una mejor coordinación y el intercambio de información sobre la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional organizado.

Por último, Guyana también ha suscrito varios tratados de cooperación sobre asistencia mutua en cuestiones penales con CARICOM y la Organización de los Estados Americanos, y ha aprobado la Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales en 2009.

Párrafo 3

3.1 ¿En qué actividades internacionales está participando o considerando participar, o qué actividades está considerando iniciar su país para mejorar el diálogo y ampliar el entendimiento entre las civilizaciones, con el fin de prevenir que se atente indiscriminadamente contra religiones y culturas diferentes?

Guyana es miembro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, de la que fue designada coordinadora en 2011, y es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, además de haber suscrito varias convenciones de la organización. También ha ratificado los siguientes tratados de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención contra la Tortura. En 2010 ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. También ha firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se espera que la participación de Guyana en la Alianza de Civilizaciones pueda contribuir a tender vínculos entre las sociedades, culturas, religiones y comunidades lingüísticas, a fin de promover el diálogo, mejorar la comprensión entre civilizaciones y forjar una voluntad colectiva para abordar los desequilibrios que existen en el mundo, como la adopción de medidas que perjudican indiscriminadamente a miembros de religiones y culturas diferentes.

Guyana, como nación multicultural, multiétnica y multirreligiosa, sigue comprometida a zanzar las brechas cada vez mayores que existen entre las sociedades, reafirmando un paradigma de respeto mutuo entre pueblos de distintas tradiciones culturales y religiosas y ayudando a movilizar medidas concertadas al respecto. Con esta finalidad, Guyana, en su capacidad nacional, comparte los principios rectores de la Alianza de Civilizaciones, en cuanto se relacionan con: a) documentos fundamentales sobre derechos religiosos y culturales como punto de referencia básicos para promover una cultura de diálogo y respeto entre todas las naciones y culturas; b) la adhesión al derecho internacional y tratados internacionales, entre ellos los derechos y responsabilidades que derivan del derecho internacional humanitario; c) la adhesión universal e incondicional a normas de derechos humanos; d) el reconocimiento de que la diversidad de civilizaciones impulsa el progreso humano; e) la adopción enérgica de medidas para erradicar la pobreza; y f) la condena del terrorismo en los términos más absolutos.

Guyana también ha cumplido sus obligaciones humanitarias en el plano nacional e internacional. Participa en el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre y ha contribuido a misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz en la región del Caribe, entre otras regiones.

Sírvase también a referirse a la respuesta de Guyana a la pregunta 2.1 del presente informe, en particular en lo concerniente a: a) la Comisión Nacional sobre la Ley y el Orden; b) la Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales con la Comunidad del Caribe y la Organización de los Estados Americanos.

3.2 ¿Qué medidas está adoptando su país para luchar contra la incitación a la comisión de actos de terrorismo por motivos de extremismo e intolerancia e impedir la subversión de las instituciones educativas, culturales y religiosas por parte de terroristas y de quienes los apoyan?

Guyana está comprometida a desalentar y luchar contra la incitación a actos de terrorismo motivados por el extremismo y la intolerancia y a prevenir la subversión de instituciones educativas y religiosas por los terroristas.

Con esta finalidad, Guyana ha aumentado la reunión de inteligencia y ha mejorado la seguridad mediante operaciones de Servicios Conjuntos y ha eliminado la exclusión social y los factores de vulnerabilidad que llevan a la contratación de células terroristas nacionales y transnacionales.

Además, el proceso de reforma constitucional de 2003 avanzó considerablemente en la resolución de problemas de seguridad étnica y racial, que pueden constituir la base para que se incite a la comisión de actos de terrorismo. De conformidad con el artículo 160 A, párrafo 1) de la Constitución de Guyana, todas las personas, instituciones y partidos políticos tienen prohibido promocionar, diseminar o comunicar toda idea que pueda tener como consecuencia generar divisiones raciales o étnicas entre las personas o adoptar medidas en ese sentido. Con arreglo a la Ley de Hostilidad Racial de 1973 (reformada por la Ley 9 de 2002), la incitación al odio racial constituye un delito penal. Una persona será considerada responsable de la comisión de ese delito si deliberadamente despierta o intenta despertar sentimientos de hostilidad o antagonismo contra cualquier sector de la sociedad o contra cualquier persona en razón de su raza. Se trata de una medida adoptada de buena fe por el Gobierno de Guyana para combatir la incitación al terrorismo motivada por el extremismo y la intolerancia y prevenir la subversión de la armonía cultural por terroristas, o personas inclinadas a la comisión de actos de terrorismo.

Guyana ha establecido, mediante el proceso de reforma constitucional de 2003 y el mecanismo de consenso parlamentario que se ha acordado, cuatro comisiones de derechos: la Comisión de Relaciones Étnicas, la Comisión de los Pueblos Indígenas, la Comisión de la Mujer y la Igualdad entre los Géneros y la Comisión de los Derechos del Niño.

Párrafo 4

4.1 ¿Qué está haciendo su país para asegurar que las medidas que se adopten para aplicar los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución [1624 \(2005\)](#) respetan todas las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario?

La Dependencia de Gobernanza de la Oficina del Presidente, creada tras las elecciones nacionales de 2006, se encarga entre otras cosas de vigilar que Guyana cumpla con las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados que ha suscrito y del derecho internacional, en particular el derecho de los

derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario. La Dependencia de Gobernanza también presta asistencia en la elaboración de los informes que debe presentar como Estado parte y puede después formular recomendaciones al Gabinete o a los distintos ministerios y organismos en sus respectivas esferas de competencia. Cuando la Dependencia considera que puede haber incongruencias, las señala a la atención de los órganos competentes del Estado como medida de orientación, y esos órganos adoptan las medidas necesarias una vez que el Gabinete haya tomado las decisiones pertinentes.

De conformidad con el artículo 212 N de la Constitución de Guyana, la Comisión de Derechos Humanos formula recomendaciones sobre cambios legislativos y de políticas, y rinde cuentas directamente al Parlamento, funcionando como entidad especializada en la evaluación de riesgos y la aplicación de planes preventivos para la protección de derechos humanos, teniendo en cuenta los sistemas de derechos humanos y los tratados internacionales en los que Guyana es parte. La Comisión se especializa en la evaluación de riesgos y la aplicación de planes orientados a cumplir con las obligaciones que incumben a Guyana con arreglo al derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario. También establece enlaces con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otros órganos competentes para abordar las denuncias y preocupaciones de las personas en relación con las cuestiones de su competencia. La función de revisión judicial que ejercen los tribunales también asegura la adhesión de Guyana a la Constitución y a sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales.
